¿Es posible una ética global?

ENRIQUE BOCARDO CRESPO*

Resumen: Este trabajo trata sobre el papel que la ética podría jugar en una cultura global. En primer lugar se esboza un breve examen de la idea de ética global, y en segundo se plantea algunos problemas que surgen graves conflictos morales como la pobreza en la que viven sumido cerca de un tercio de la población mundial, la progresiva degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, y el impacto sobre las economías locales de la expansión de las grandes compañías transnacionales; y finalmente se desarrolla algunas reflexiones propias de la ética global tal y como han sido propuestas en los foros de debate internacionales. Una conclusión parece clara: los valores democráticos de administración gubernamental en un serio conflicto cuando se los enfrentan a las prácticas agresivas capitalistas del comercio global.

Palabras clave: ética global, programas de desarrollo, pobreza, carencia de autoridad central, derechos humanos básicos, mercados transnacionales, políticas del Banco Mundial, nuevas propuestas éticas.

Abstract: This paper is concerned with the role ethics is supposed to play in global culture. First, a brief survey on global ethics is roughly outlined; secondly some global problems arising ethical issues such as global poverty, the degradation of natural environment, or the impact of the politics of new transnational companies are reviewed; and finally a prospect on what is to be counted for global ethics and some of its severe political shortcomings are purported in connection with recent international proposals and formal declarations. A tentative conclusion to be drawn is that democratic values such as political accountability, the balance of dispersed interests or the availability of free and unbiased information appear likely to be incompatible with the current politics of transnational trade.

Key words: Global ethics, development programs, poverty, the lack of central authority, basic human rights, transnational markets, the politics of World Bank, new ethical proposals.

True Freedom lies where a man receives his nourishment and preservation, and that is the use of the Earth.

Gerrard Winstanley: The Law of Freedom

I

La ética global no es estrictamente hablando una tipo particular de teoría normativa ética. Es la ética que surge ante consideración de dos problemas. Uno, que los conflictos y adversidades que


afectan a una buena parte de la humanidad, por lo que se encuentra de nuestro entorno físico, tiene un efecto global sobre el resto de la población del planeta. Esta consideración no se fundamenta en ninguna doctrina metafísica o filosófica sobre la comunidad o la hermandad de los seres humanos, como tampoco se sustenta en ninguna religión específica, por amplia que pueda ser. Se basa más bien en la progresiva constatación empírica de cómo ciertos problemas como la pobreza, la salud pública, el terrorismo, el cambio climático, el impacto medioambiental de la emisión de gases, la explotación de los bancos de peces, el uso de energías no renovables, la explotación de los bosques y recursos minerales, el uso de pesticidas, o la economía de monopolios transnacionales tienen un efecto directo sobre las condiciones de vida y la calidad medioambiental de la vida del resto de los ciudadanos del mundo. Y otro, que la creciente globalización del espacio económico y político como consecuencia del espectacular desarrollo de las empresas transnacionales está actualmente creando serias amenazas a la economía de los países menos desarrollados y produciendo unas consecuencias devastadoras para el medio ambiente, requieren una creciente concienciación de la opinión pública con el objeto de parar algunos de sus más inmediatos efectos. Efectos que si no llegan a paralizarse pueden ocasionar un grave perjuicio a las generaciones venideras.

La ética global no es una disciplina filosófica, como tradicionalmente ha venido siendo la ética que se ha elaborado en la tradición académica occidental. La solución que propugna la ética global pasa necesariamente por la elaboración de amplios programas de actuación que integran diversas disciplinas y cuya puesta en común sobrepasa tanto los límites teóricos de la ética tradicional como la capacidad de información que es capaz de disponer un sólo individuo. Los problemas sociales y medioambientales a menudo traspasan los límites de los estados nacionales. La solución de tales problemas pasa necesariamente por una colaboración entre instituciones locales, nacionales, e internacionales así como de organizaciones no gubernamentales que ayuden a detectar los problemas y hacer un correcto diagnóstico, que tengan en cuenta el difícil equilibrio de los intereses envueltos de las diferentes partes tanto nacionales e internacionales.

La ética global surge del reconocimiento de que los problemas vitales que hoy enfrenta el mundo no se pueden encarar dentro del estrecho marco jurídico que tradicionalmente han impuesto las políticas basadas en la existencia de estados soberanos. De hecho, uno de los grandes obstáculos de la ética global es precisamente la tensión política que surge entre la satisfacción de los intereses de los grandes monopolios transnacionales y la necesidad de proteger los derechos humanos más elementales que continuamente se ven expuestos a violaciones y arbitrariedades como consecuencia de una agresiva política consumista.

La solución de los problemas de la ética global implica la participación de instituciones nacionales y de organizaciones internacionales que faciliten la coordinación de las acciones humanas locales y analicen el impacto que tienen a nivel global. A medida que las sociedades se hacen más complejas la confianza en los individuos, basada tradicionalmente en el conocimiento del carácter y los contactos interpersonales, es progresivamente sustituida por la confianza en las instituciones. Son las instituciones, entendidas básicamente como conjunto de normas y de organizaciones las que deberían detectar los problemas más acuciantes, generar la información adecuada, propiciar la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas que les afectan directamente, llegar a acuerdos y hacerlos valer mediante tratados y protocolos internacionales.

Según el informe del Banco Mundial para el año 2003:

«las formas democráticas de tomas de decisión, a pesar de sus limitaciones, están asociadas con procesos que exhiben características institucionales deseables; recogen señales, equili-
bran los intereses y ejecutan las acciones elegidas. Un creciente cuerpo de literatura encuentra que los indicadores de voz y la responsabilidad están estrechamente asociados con mejores resultados en el desarrollo, que incluyen un aumento en la renta nacional per capita, menor índice de mortalidad infantil y una disminución considerable en la población de analfabetos»

El propio Banco Mundial menciona dos mecanismos plausibles a disposición de las democracias para ayudar a la protección medio-ambiental y a la eficiencia de las instituciones económicas. El primero es que los regímenes democráticos suelen ayudar a darle más peso específico a los intereses dispersos. El segundo es la ayuda que la libertad de expresión y asociación presta en la detección de señales y ajuste de cambios. Con el primer mecanismo se supone que se verá satisfecho el mayor número de intereses en perjuicio de los de la minoría. En general las riquezas medio-ambientales se consideran bienes públicos cuyos intereses afectan a muchos individuos. En cuanto al segundo mecanismo es esencial para desarrollar la conciencia pública de ciertos valores éticos globales que difícilmente se harían extensivos sin el concurso de la libertad de información.

La sensibilidad que gran parte de la población de los países industrializados del hemisferio Norte está mostrando hacia los acuciantes problemas de deforestación, la extensión del Sida, los efectos de los aerosoles sobre la capa de ozono, la pobreza y el hambre de los países del área Sub-Sahariana, el aumento de la inmigración, el desorbitante gasto en armas de destrucción masiva, o la protección de minas antipersonas, difícilmente se puede entender sin el esfuerzo que desde finales de los años setenta y en particular a lo largo de la década de los noventa del siglo pasado han realizado las organizaciones no gubernamentales en la creación de una opinión pública favorable a los intereses de los menos favorecidos; en ocasiones en franca oposición a los intereses de los grupos fuertes de presión representados por los gobiernos occidentales.

II

En la actualidad 2.800 millones de seres humanos viven en los países no desarrollados con menos de dos dólares diarios. De ellos 1.200 viven al borde de la más absoluta pobreza con menos de un dólar diario. En la década de los años 90 del siglo XX, 46 países se vieron envueltos en conflictos, la mayoría de ellos civiles, en más de la mitad de ellos (cerca de 17 de los 33) se encontraban los países más pobres de la Tierra. Más de un millar de millones de personas, pertenecientes a los países de renta media y baja, carecen de acceso al agua y cerca de dos mil millones no tienen servicios sanitarios. 820 millones de personas no reciben suficiente alimento para llevar una vida sana y cerca de 160 millones de niños sufren malnutrición y están notablemente por debajo del peso que le corresponde.

En diez años en los países de Iberoamérica se ha aumentado la pobreza y en el año 2001 contaba con 224 millones de pobres, de los cuales cerca de 90 millones se veían obligados a vivir con un dólar diario. Es muy dudoso que el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) haya

---

2 Ibidem, p. 46.
3 Ibidem, p. 3.
5 Ibidem, p. 12.
beneficiado a la economía de México: la población de pobres del país no hizo más que aumentar y hoy alcanza la cifra de 15 millones de personas. Estados Unidos, por su parte, sigue congestionando la economía de los países de América Central desde que en 1961 el Tratado General sobre la Integración Económica de América Central estableció el Mercado Común Centro Americano (CACM).

Entre 1994 y 1998 la fortuna neta de las 200 personas más ricas del planeta aumentó más del doble, la cantidad superaba el billón de dólares. Sólo la riqueza de los tres millonarios más importantes del mundo supera la suma de cada PIB de los países menos desarrollados y de los 600 millones de seres humanos que lo habitan6.

Se ha producido una de las más graves desaceleraciones en el desarrollo económico: se ha bajado del 13% en el 2000 al 1% en el 2001; por otra parte los países en vía de desarrollo han caído un 10% en la demanda de sus exportaciones. Han sido los países Iberoamericanos y los del Este de Asia los primeros en sentir el impacto de la desaceleración económica ante la bajada de demanda de sus exportaciones en artículos manufacturados por parte de Estados Unidos y Japón.

En la actualidad 1.300 millones de personas viven en ecosistemas frágiles y su número está creciendo a un ritmo mucho mayor de lo que lo hace la población en las áreas rurales más favorecidas. Las condiciones en las que se encuentran esos seres humanos para hacer frente a la pobreza son peores que las que tienen que enfrentar los países con renta media o que se encuentran en vías de desarrollo. La población en las grandes urbes de los países en desarrollo se espera que aumente más del doble en las próximas décadas; es dudoso que esos países cuenten con los recursos suficientes para solucionar los graves problemas de infraestructuras, pobreza, polución, congestión o índice de criminalidad.

Cada década se destruye un promedio del 5% de los bosques tropicales, de mantenerse esta brutal media de deforestación, a finales del presente siglo cerca de la mitad de los bosques tropicales serán completamente arrasados. Según datos de la FAO (Organización para el Alimento y la Agricultura) la deforestación se ha concentrado en los países en vía de desarrollo que han perdido cerca de 200 millones de hectáreas entre 1980 y 1995. En la zona del Amazonas brasileña el promedio de deforestación anual oscila entre 11 mil y 29 mil kilómetros cuadrados durante los años noventa del siglo pasado. Según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) de 1997, tan sólo una quinta parte de los bosques originales de la Tierra permanecen dentro de un ecosistema estable. Más de un tercio de la biodiversidad terrestre se está restringiendo a fragmentos limitados que cubren aproximadamente el 1.4% de la superficie de la Tierra y corre el serio peligro de desaparecer para siempre si se llegaran a perder esos fragmentos.

Las condiciones medio-ambientales se han deteriorado gravemente en diferentes lugares del planeta y seguramente lleguen a ser peores si se continúa con las mismas políticas agresivas de explotación. Cerca de 2 millones de hectáreas de tierra, de los cuales el 23% corresponde a tierras de secano, pastos, bosques y maderas se han degradado desde los años cincuenta del pasado siglo7.

La Comisión Mundial para el Agua (WCW) estima que el uso del agua se incrementará hasta el 50% en los próximos treinta años. La mitad de la población mundial, es decir, cerca de tres mil millones de personas que viven principalmente en África, el Oeste Medio y en el Sur de Asia padecerán graves problemas en el suministro de agua para el año 20258. El suministro del agua es un elemento esencial para que otras medidas en la reducción de la pobreza como la nutrición o los

---

6 PNUD de 1999, p. 3.
7 WDR 2003, p. 2.
programas de prevención de enfermedades sean efectivos. Teniendo en cuenta que en los próximos cincuenta años la mayoría de los habitantes del planeta vivirán por vez primera en la historia en ciudades, se requiere un serio esfuerzo global para administrar y garantizar el suministro de agua a las áreas urbanas y asegurar que la fuerte inversión que tendrán que hacer los países más pobres en infraestructuras no aumenten considerablemente su deuda externa.

Dos tercios de todos los bancos de pesca están completamente explotados o han sobrepasado con diferencia los límites sostenibles de explotación; y el 58% de los arrecifes de coral del planeta pueden desaparecer a lo largo del siglo XXI. El 34% de todas las especies de peces están seriamente amenazadas por las actividades humanas. Para el año 2025 se calcula que cerca de las tres cuartas partes de la población mundial vivirá dentro de 100 kilómetros de la costa del mar creando una seria amenaza sobre el ecosistema de costas.

Otro problema fundamentalmente global es el cambio en el clima del planeta. Las emisiones de gases con efecto invernadero se mezclan rápidamente en la atmósfera y tienen el mismo impacto sobre el cambio climático sin importar la procedencia de su emisión. El impacto de cambio climático ya se ha hecho notar en algunas regiones del planeta. Islas de bajo nivel y áreas costeras corren un serio riesgo de sufrir inundaciones y daños debido a fuertes tormentas. Las zonas áridas y semiáridas en África y en Asia sufrirán un aumento de temperatura. La relación entre la pérdida de la vegetación y la reducción de lluvias es muy probable que origine una rápida desertificación. Los datos de que disponemos indican que el impacto del cambio del clima probablemente llegue a aumentar creando nuevos riesgos de diferentes especies en muchos países. El efecto se sentirá particularmente en numerosos países en vía de desarrollo que no han contribuido en el cambio climático. Teniendo en cuenta que las emisiones de gases per capita en los países industriales son mucho más altas que en los países en vía de desarrollo y que probablemente se mantengan así durante un largo tiempo, los posibles efectos desastrosos que el cambio climático pueda tener sobre los países menos favorecidos es una consecuencia directa de la política indiscriminada de desarrollo de los países más ricos.

A nivel local, centenares de ciudades en los países en vía de desarrollo tienen un porcentaje elevado de población ambiental; a nivel global, el problema es aún más grave, la capacidad de la biosfera para absorber el dióxido de carbono sin alterar las temperaturas se ha visto seriamente comprometida debido principalmente a la fuerte demanda de materias derivadas del petróleo que impone las fuentes de energías en los países del hemisferio Norte. De hecho, el uso global de la energía tradicional ha crecido en la misma proporción que el producto interior bruto. En los últimos cincuenta años el exceso de nitrógeno, principalmente el que se deriva de los fertilizantes, aguas residuales del consumo humano y de la combustión de derivados del petróleo han alterado masivamente el ciclo global del nitrógeno produciendo efectos dañinos que van desde la reducción de la fertilidad del suelo hasta el exceso de nutrientes en los lagos, ríos y aguas costeras.

La renta media en los veinte países más ricos es 37 veces mayor que el de las veinte naciones más pobres de la tierra. Los países de renta baja habrán de crecer a razón de 3.6% per capita si fueran a reducir a la mitad su pobreza para el 2015, según los objetivos que se ha fijado las Naciones Unidas para las Metas del Desarrollo del Milenio. Un informe de la UNICEF revela que la obligatoriedad que los países industrializados impone en el pago de la deuda externa así como en los pro-

8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 4.
10 Ibidem, p. 2.
gramas de ajuste estructural patrocinados por el Fondo Monetario Internacional es el responsable directo de la muerte de medio millón de niños al cabo de un año

El costo de subsidios que las naciones ricas imponen a la agricultura oscila entre mil millones de dólares diarios, lo que supone seis veces más de la cantidad que se destina para asistencia al desarrollo. El propio Banco Mundial ha sugerido que es necesario que los países ricos suspendan los subsidios a la agricultura, aceleren la transferencia de nuevas tecnologías y proporcionen más ayuda a los países del área Sub-Saharana que son los que están teniendo más dificultades en aumentar la productividad agrícola ante el rápido crecimiento de la población.

Todos estos problemas tienen una característica en común: todos surgen como el resultado de una actuação injusta, cada uno de ellos se origina tras lo que aparece como una inevitable violación de los derechos humanos más elementales. Y todos son el producto del desprecio por los códigos éticos más elementales, que por lo demás casi todos los países con regímenes democráticos reconocen como derechos fundamentales. Pero si consideramos el estado de la evolución de la ética política internacional, parece como si la única evidencia que hoy dispusiéramos para seguir creyendo en los derechos humanos es su persistente violación en casi cualquier región del planeta.

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales como UNDP o el Banco Mundial coinciden en señalar que es necesario que las decisiones se tomen de una manera inclusiva y consultativa de suerte que se reconozcan las opiniones de la gente más pobre y que sean ellos los que tengan el control de sus propios recursos. También se espera que los gobiernos democráticos sean capaces de firmar y ratificar acuerdos multilaterales tanto en la protección medioambiental como de los derechos humanos. Pero la presencia de un régimen democrático no es una condición para creer en un reparto igualitario de la riqueza o en una mayor disponibilidad para subscribir acuerdos internacionales que favorezcan el desarme o el desarrollo de los derechos humanos. Es conocida la negativa de los Estados Unidos a suscribir los acuerdos de Kyoto, y sigue siendo junto a Rusia, China, Grecia y Finlandia uno de los pocos países que todavía no han ratificado el Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersonas; asimismo la mayoría republicana del Senado norteamericano se opuso enérgicamente a la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en octubre de 1999.

La gente pobre no puede desarrollar su capital humano o sus riquezas con lo que su potencial se malgasta y no son capaces de participar de manera estable en sociedades más amplias, con lo cual las sociedades del tercer mundo se hacen más vulnerables a los cambios económicos, los conflictos sociales y al aumento de la criminalidad. Cuanto menos equitativas son las rentas y riquezas en el sector rural, menos poderoso es el efecto del desarrollo económico en la reducción de la pobreza. En las grandes superficialidades urbanas en donde un gran porcentaje de la población, sobre todo el sector compuesto de emigrantes africanos, carece de protección jurídica para acceder a los servicios y están desprovistos de los más elementales derechos humanos como representación política, asistencia sanitaria o escolaridad.

El problema de la ética global no se encuentra tanto en la creación de códigos de conducta, ni en la declaración de principios o en los acuerdos internacionales para el mantenimiento de los derechos elementales, como en la ausencia de un poder central que sea capaz de hacerlos cumplir. La ética global no se ocupa de las cuestiones tradicionales de la ética como la naturaleza de los predicados

morales, la justificación del conocimiento moral o si es posible creer en la existencia de valores objetivos; sino más bien en encontrar un medio eficaz de evitar situaciones manifiestamente injustas o inhumanas. Así entendida, da por sentadas algunas cuestiones relativas a los valores humanos o sobre los criterios de decisión que siguen discutiendo en la filosofía moral o en la metaética. En principio no deberían existir dificultades que impidieran aceptar la Declaración de los Derechos Humanos como las reglas elementales que habrían de regir en las relaciones transnacionales. De hecho, así es como queda incorporada en la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Internacional y en casi todos los acuerdos multilaterales sobre desarme, cooperación medioambiental o reducción de la pobreza.

Una de las características de los problemas globales es la búsqueda de equilibrio entre diversos intereses y la voluntad de llegar a ciertos compromisos ante la ausencia de una autoridad central. Se necesita un compromiso global interestatal en otras cosas porque la acción nacional ha demostrado ser manifiestamente insuficiente para afrontar la escala de demandas y excedentes producidos en un mundo más interconectado y con una economía de mercado global. Algunas iniciativas recientes como Las Metas para el Desarrollo del Milenio, NEPAD (New Partnership for Africa's Development), Comercio Global, o los acuerdos de Monterrey demuestran que es preciso conseguir acuerdos mutuos que superen la estrecha cooperación nacional.

Entre los objetivos de la ética global está el de establecer alianzas de participación a largo plazo entre el sector público, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales que promuevan la transparencia, responsabilidad, la transferencia del conocimiento y soluciones que representen, que equilibren los intereses de todos los grupos. A menos que los países en vía de desarrollo tengan acceso libre de impuestos y de cuotas a los mercados de las naciones ricas, los beneficios de la globalización no se dejarán sentir en la economía de los países más pobres. Otro objetivo sería el de vincular el desarrollo con el proceso de incorporación de los más pobres en la toma de decisiones que determinan las condiciones en las que se desenvuelven sus vidas, particularmente en aquellos casos que supongan la definición de prioridades locales. Esta solución está abocada irremisiblemente a enfrentarse con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que intentarán hacer prevalecer sus prioridades por encima y en ocasiones en contra de las prioridades locales.

Cabe citar dos propuestas recientes de ética global. Una se debe al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) que ha puesto en marcha un proyecto global basado en seis grandes áreas de actuación. Primera, mejorar las prácticas democráticas en los gobiernos de manera que se aumenten la diversidad política en las decisiones de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo y aumentar la efectividad y la responsabilidad en las instituciones políticas. Segunda, reducir la pobreza intentando romper el ciclo de privación y de desesperanza que sigue siendo el primer obstáculo en el desarrollo. Tercero, ayudar a cerca de un cuarto de la población mundial que vive en crisis o en regiones de post-crisis a llevar a cabo la transición de la dependencia humanitaria en la que aún viven al marco de la comunidad política capaz de generar su propio desarrollo. Cuarto, proporcionar a los países en vías de desarrollo la capacidad de proteger los recursos naturales y de explotarlos de manera sostenible. Quinto, ayudar a los países en desarrollo a servirse de los nuevos recursos digitales y a utilizar ICT (Information Communication Technology) para potenciar otras alternativas tecnológicas. Y sexto, fortalecer las respuestas gubernamentales a la amenaza que el SIDA representa para el desarrollo de las futuras generaciones.

La otra propuesta, las ocho metas que se ha fijado el MDG (Millennium Development Goals) entre las que se encuentran:
1) Erradicar la extrema pobreza y el hambre
2) Alcanzar una educación primaria universal
3) Promover la igualdad de sexos y fortalecer la posición de las mujeres en el mundo
4) Reducir la mortalidad infantil
5) Mejorar la sanidad materna
6)Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades
7) Asegurar un medio ambiente sostenible
8) Desarrollar una estrategia común de desarrollo global

Finalmente es preciso resaltar que los derechos de propiedad y las normas jurídicas son esenciales en la creación de riquezas humanas así como en las operaciones de mercados. Se requiere instituciones que coordinen y aseguren el adecuado suministro de riquezas que no aparecen espontáneamente en los mercados, como las riquezas medio-ambientales (el agua, el aire, los bancos de pesca o los bosques, las riquezas sociales, la confianza mutua, la seguridad y propiedad de las personas). Cuanto más se oiga a la gente menos riqueza se desperdicia, admite ahora el Banco Mundial en el informe del año 2003, después de algunas lamentables experiencias.12

Los grupos sociales que carecen de riquezas, carecen asimismo de representación para hacer oír sus opiniones y hacer valer sus intereses en las instituciones políticas nacionales e internacionales; además, normalmente no tienen participación en la toma de decisiones políticas y económicas que afectan directamente a sus vidas. El resultado es que las instituciones no realizan las funciones de coordinación, lo que provoca a su vez la creación de políticas gubernamentales que perpetúan el desequilibrio y la desigualdad en la distribución de riquezas. La solución que el Banco Mundial propone pasa por:

1) Identificar los círculos viciosos que atenúan el desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza.
2) Invertir en proyectos, programas e iniciativas que creen instituciones más democráticas e inclusivas.
3) Apoyar la evolución de un ecosistema de organizaciones que sean capaces de poner en práctica el aprendizaje y que apliquen ese aprendizaje en mejorar políticas y proyectos.

Se ha de tener en cuenta, no obstante, que no siempre las políticas de inversión y re-estructuración que patrociná el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional son efectivas; y en ocasiones han originado resultados verdaderamente catastróficos. El proyecto de colonización de «Polonoroeste» a principios de los años ochenta del siglo pasado en Rodonia (Brasil) produjo una deforestación masiva, la destrucción del hábitat de los pueblos indígenas y de ecosistemas. En los años noventa, la construcción de la presa Sardar Sarovar en Narmanda (India), que sin un informe previo sobre el impacto que la construcción de la presa iba tener sobre el medio ambiente produjo un reasentamiento forzoso de centenares de miles de personas afectadas. El Programa de ajuste estructural de Ecuador de 1994 que tuvo un impacto negativo sobre los pueblos indígenas. Las repercusiones que sobre la deuda externa tuvo el embalse de Arun en Nepal a mediados de los años noventa; el reasentamiento

forzoso de decenas de miles de afectados que provocó el embalse de Yaciretá en Argentina y Paraguay entre 1999 y el año 2000. La Comisión Meltzer, que contó con datos suministrados por el Banco Mundial, sostiene que entre el 55% y el 60% de los proyectos de inversión no logran su objetivo, y que en los países del área Sub-Sahariana el porcentaje se elevaba al 73%. De hecho:

«sólo el 5% de los proyectos de inversión del Banco se evalúan entre 3 y 10 años después de su finalización, lo que significa, según la Comisión Meltzer, que el Banco Mundial se caracteriza por una «baja efectividad»; que las actividades de evaluación del Banco Mundial tienen «poca credibilidad»; que sabe muy poco sobre el impacto real y la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo; y que pese a todos los cambios iniciados, lo importante todavía es aprobar préstamos, que los fondos se gasten correctamente, y que el préstamo sea devuelto en tiempo y forma, más que la efectividad de los resultados y su impacto en el desarrollo sostenible y en la reducción de la pobreza»

III

La efectividad que los países industrializados han demostrado en la lucha contra la polución del aire, la emisión de gases, la protección de zonas costeras, el terrorismo, o la lucha contra la contaminación de aguas residuales, firmando acuerdos internacionales e integrando los países en diferentes organizaciones de alcance global como el Protocolo de Montreal, la Organización Mundial del Comercio, patrocinando los códigos de conducta corporativos, el Instituto para la Administración del Agua Internacional (IWM), la Red de Acción de los Pesticidas (PAN) o el IISA, no es ni mucho menos equiparable al esfuerzo de promover un conjunto de valores éticos capaz de reducir drásticamente la pobreza en la que viven más de mil millones de seres humanos, de crear un sistema jurídico internacional verdaderamente efectivo en la persecución de las continuas violaciones de los derechos humanos, de cambiar las reglas del mercado en beneficio de un comercio justo que favorezca a las capas más desprotegidas de los países del tercer mundo en contra de los intereses de los grandes monopolios capitalistas.

Estados Unidos, a pesar de haber reducido ostensiblemente sus intervenciones militares en los países iberoamericanos desde la invasión de Granada, sigue, no obstante, colapsando las economías locales de los países del área de Centro América, demostrando una falta de respeto por los valores éticos más elementales e imponiendo unas condiciones de sobre-exploitación a una población que no es capaz de hacer oír sus opiniones en los foros internacionales. Las corporaciones de Estados Unidos controlan prácticamente la producción de plátanos de toda América Central; de hecho, la población norteamericana consume cerca del 60% de los plátanos producidos en el área centro-americana. Es muy escaso el valor de venta del plátano que revierte a los países que lo producen. A comienzos de la década de los años ochenta del siglo pasado, un estudio de las Naciones Unidas revelaba que sólo 17 céntimos de cada dólar del precio de venta revertía a los países de origen en cualquier forma, incluida la de impuestos.

En los años ochenta y noventa del siglo XX las empresas norteamericanas como la Chiquita Brands, Castle & Cooke y la R. J. Reynolds ahogaban el mercado centroamericano con las astronó-

---

micas cantidades de sus operaciones mercantiles. Por ejemplo el valor de todas las exportaciones de Honduras durante 1981 suponía sólo un 20% de las ventas anuales de la United Brands16.

La Chiquita Brands International, la Dole Food Company y la Monte Fresh Produce, tres compañías integradas en la American Financial Group que dirige Carl H. Lindner, un escrupuloso bautista de Cincinnati, controlan básicamente el 80% del mercado mundial del plátano. La empresa del devoto puritano Mr. Lindner lleva explotando a la población de Guatemala, con unos salarios que oscilan entre 0,71 la hora y 31,57 euros a la semana, no permite la revisión de salarios por comité sindicales y tiene la práctica habitual de fumigar con pesticidas alterando gravemente el ecosistema del contorno17. Ninguna de esas acciones sería tolerable en los Estados Unidos, que suceden en países como Guatemala es el resultado directo de la política de globalización que permite a los grandes monopolios transnacionales producir lo que quieran y donde quieran sin que exista una fuerte autoridad central internacional capaz de obligarles a someterse a las normas del derecho internacional en contra de la explotación o en favor del derecho de libre reunión sindical.

La globalización no ha hecho más que empeorar la situación de los países más pobres. De acuerdo al esquema de responsabilidad política elaborado por el Banco Mundial18, la efectividad de los procesos de elaboración de las leyes depende de la habilidad que cuenten las constituciones políticas y la implantación de valores éticos, los gobiernos y las diferentes agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales de solucionar y poner en práctica las necesidades y demandas que surgen de las partes interesadas. En el caso de los países de renta baja y en vías de desarrollo la relación entre los ciudadanos y las instituciones queda rota ante la debilidad de los gobiernos, de suerte que asistimos a un círculo vicioso entre la falta de atención de las demandas de los ciudadanos y la ineffectividad de las políticas locales. No se sabe si los gobiernos son débiles porque son incapaces de hacer frente de una manera efectiva a equilibrar los intereses de los ciudadanos, o si, por el contrario son incapaces de resolver la pobreza de los ciudadanos porque no son democráticos.

La situación, sin embargo, no se encuentra exenta de intereses. Algunas compañías transnacionales tienen un volumen de ventas que supera el PIB de muchos países; por ejemplo la General Motors supera a Tailandia y Noruega, la Ford Motor está por encima de Arabia Saudi, o Polonia, Mitsubishi, Dutch/Shell, Exxon o Toyota Motor sobrepasan a Malasia, Israel, Colombia y Venezuela19. Además teniendo en cuenta que el 53% de toda la riqueza económica es creada por compañías transnacionales y no de empresas que actúen a nivel local o nacional20 y si finalmente se asume, como lo hace el Banco Mundial, que los gobiernos democráticos se encuentran en mejores condiciones que otros para ser más eficientes en los recursos económicos, en equilibrar intereses dispersos y detectar las necesidades de sus ciudadanos y darles satisfacción dentro del marco de convivencia que supone los derechos humanos, se encuentra una clara incompatibilidad entre la promoción de valores democráticos que sean eficientes a la hora de satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos y los intereses de las grandes monopolios transnacionales.

---

16 Ibídem.
18 WBR 2003, p. 48.
19 Ramson: p. 28.
La práctica de los grandes monopolios está regulada por las leyes del mercado y sus objetivos no son otros que el de maximizar sus beneficios, teniendo en cuenta su carácter global la mayoría de ellas escapan al control directo de los gobiernos; una situación que se hace particularmente insostenible en los países de renta baja donde las instituciones políticas son por los general mucho más débiles que en los países industrializados. Lo ideal sería que los monopolios se regulasen por códigos de conductas morales según la estipulación de OIT y que hubiera una autoridad central que tuviera el poder de obligarles a cumplir sus compromisos. Pero en la práctica, los grandes monopolios escapan virtualmente a toda responsabilidad ética. Un informe de la OCDE ha puesto de manifiesto que los países en vías de desarrollo pueden estar perdiendo alrededor de 50 mil millones de dólares cada año sólo en concepto de evasión corporativa de impuestos de las grandes transnacionales\(^{21}\).

De momento la era globalizada no ha sido capaz de crear instituciones transnacionales con la misma efectividad que cuentan las grandes compañías de determinar y alterar el modo de vida de centenares de millones de seres humanos para controlar el impacto en la calidad de vida y en la generación de pobreza que generan la inversión de los monopolios en los países de renta media y baja. La Inversión Extranjera Directa, que en la actualidad representa la fuente de transferencias financieras que los países ricos destinan a los países pobres se concentran principalmente en países como China, Tailandia, Indonesia, Malasia, Brasil y México. Lejos de reducir la diferencia de renta, ha hecho más que aumentar las desigualdades creando, como en el caso de las maquilas de México una explotación humana comparable por su crueldad a las condiciones de vida infrahumanas que tuvieron que sufrir el proletariado europeo durante la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX. SANYO trasladó a finales de 1997 la fabricación de todos sus ordenadores portátiles a México; IBM por ejemplo invirtió en Jalisco cerca de 2.500 millones de dólares\(^{22}\).

No es casualidad que China, un país notorio por su falta de respeto hacia los derechos humanos, reciba una cuarta parte de los flujos de la Inversión Directa Extranjera. Como en el caso de México, la principal atracción de China es la disponibilidad de una mano de obra barata, pero en el caso chino las ventajas para las empresas transnacionales se multiplican teniendo en cuenta que en China todavía se utiliza el trabajo forzado en la industria de la confección y no existe posibilidad de crear asociaciones sindicales independientes. Dos inmejorables oportunidades que no pasaron desde luego desapercibidas para la compañía Levi Strauss cuando decidió volcase en el mercado chino. Normalmente las mujeres chinas trabajan 16 horas, el doble de lo que se permite en las leyes de los países industrializados. El salario mínimo mensual permitido por ley laboral china es de 55 dólares mensuales, empresas como la Elegant Top Shoes ofrece sólo 49 dólares. En la fábrica Merton que abastece de juguetes a las empresas norteamericanas McDonald, Mattel y Warner Brothers los trabajadores de algunas secciones llegan a trabajar cerca de 14 horas diarias. El beneficio de la disponibilidad de la mano de obra china, a pesar de la patente explotación sobre la que se basa, constituye un ahorro capital para las empresas multinacionales.

En El Salvador los trabajadores de las fábricas de ropa para empresas transnacionales como Adidas, Puma, o Nike se ven obligados a trabajar más de 12 horas diarias por el que reciben alrededor de 7,20 dólares y al menos de la mitad que necesitarían para vivir y llevar una vida medianamente digna. Lo mismo ocurre en Camboya o Bangladesh en donde las trabajadoras ganan menos de 40 dólares mensuales costeando para la Gap y otras empresas. La lógica de la inversión capitalista es


\(^{22}\) Ibidem, p. 180.
simple: el beneficio se dispara al disminuir los costes de la mano de obra que tienen un impacto directo sobre los costes de producción. No es difícil imaginar los costes de inversión de una empresa que paga 2 dólares en salario por unas zapatillas, que posteriormente venderá a 67 dólares.

Por otra parte, en ocasiones la inversión extranjera no hace más que crear conflictos civiles, priva de sus derechos a la población indígena o destruye ecosistemas medio-ambientales en un descarado beneficio para el país de origen de la multinacional. En Angola el gobierno financió el gasto militar con la producción de petróleo, pero la UNITA, la fuerza de oposición, se abastece de armas con la venta de diamantes. Se estima que entre 1992 y 1998 la UNITA produjo diamantes con un valor de alrededor de 3.700 millones de dólares que fueron a parar a empresas transnacionales y que en buena parte fueron los responsables de los fracasos de las conferencias de paz. En Sudán los ingresos que genera el petróleo ascienden a 365 millones de dólares anuales que se están utilizando para financiar la guerra civil; mientras tanto el gobierno está desplazando masivamente a grandes poblaciones con el objeto de «abrirles camino» a las empresas que tienen las concesiones petroleras como Talisman de Canadá o Petronas de Malasia.

Ninguna de estas empresas transnacionales ha puesto reparos en los beneficios que extraen de una situación manifestamente injusta y que genera miseria y sufrimiento. La fuerte inversión que la compañía BP Amoco realizó en la región de Casanare (Colombia) no hizo más que aumentar la violencia de los grupos paramilitares provocando una violación mayor si cabe de la ya existente de los derechos humanos. El daño que la empresa causó a la población local jamás fue un óbice para parar la explotación petrolífera.

A pesar de que los grupos indígenas están protegidos por leyes internacionales y presumiblemente cuentan con los mismos mecanismos de amparo de las instituciones internacionales para la protección de los derechos humanos, con frecuencia son desplazados de sus entornos naturales y el apoyo de las empresas transnacionales. El caso de Papua Nueva Guinea es especialmente doloroso. Una de las empresas de explotación de cobre, la Freeport, con sede en los Estados Unidos, generaba alrededor de 100.000 toneladas diarias de desperdicios como consecuencia de la extracción del cobre. El resultado ha sido devastador para el medio ambiente: los bosques de sagú, que antes de la aparición de la compañía constituían el alimento básico de la población, se han secado, privando así a la población indígena de su principal fuente de alimentación; los gigantescos depósitos de mineral han elevado el nivel de las aguas, lo que ha provocado numerosas inundaciones del río y por sí sola ha hecho aparición la malaria, una enfermedad que antes era desconocida en la región.

Al este de Kalimantan (Indonesia) otra empresa transnacional, la Unocal, ha destruido el medio de vida de los pescadores de langostinos al arrojar al mar los desperdicios de las explotaciones de gas y de petróleo. Probablemente el ejemplo más sobresaliente de explotación indiscriminada y de degradación capitalista se encuentre en la explotación del coltan en la República Democrática del Congo, la colombia-tantalita, un mineral básico en la fabricación de móviles y microelectrónicas;

«El coltan ha sido llamado el «polvo mágico» de la industria microelectrónica. Es el que hace funcionar los teléfonos móviles. Altamente resistente al calor, es utilizado como revesti-
miento de los componentes electrónicos en los teléfonos móviles, las «play stations», así como en la construcción de aviones militares. La mena es casi tan pesada como el oro y no mucho más barata. En su momento de mayor demanda, en diciembre del 2000, el coltán valía unos 760 dólares por kilo en los mercados mundiales.

Para países como Australia y Canadá, el coltán genera grandes cantidades de riqueza y prosperidad. En teoría podría suceder lo mismo en la República Democrática del Congo (RDC), que según los cálculos posee hasta el 5% de las reservas mundiales. Pero en el caso de la RDC, el coltán es el centro de un conflicto brutal que ha costado miles de vidas y ha desencadenado hambre, enfermedades y desplazamientos masivos. El ejército ruandés controla gran parte de la minería del coltán y transporta la mena a Kigali. Los analistas calculan que a través de esa ruta se han obtenido unos 250 millones de dólares (más que las exportaciones declaradas por Ruanda). Uganda también está involucrada en el saqueo del coltán y existen casos documentados de masacres de civiles causadas por los esfuerzos militares para salvar la áreas mineras.

Los ingresos derivados del coltán son la causa del terrible sufrimiento provocado por una guerra civil que ha costado la vida a miles de personas y ha dejado un millón de desplazados. En palabras de un Panel de Expertos de la ONU que ha criticado el comercio del coltán: «el único perdedor en esta empresa es el pueblo congoleño». No se sabe qué camino toma el coltán después de haber sido saqueado en el este de la RDC. Parece, sin embargo, que acaba en los teléfonos móviles, los ordenadores y otros artículos electrónicos. Un informe sugiere que casi un 8% del coltán utilizado en los Estados Unidos puede originarse en la República Democrática del Congo.  

Parece como si toda la objetividad que le concedemos a los derechos humanos, reglas básicas llamadas a regular la convivencia de los seres humanos sobre el planeta, perdiera por completo su compromiso ético ante los cuantiosos beneficios que es capaz de generar la explotación capitalista. Por lo que respecta a la práctica habitual de las grandes empresas transnacionales los astronómicos beneficios que consiguen son difícilmente separables de las ventajosas oportunidades laborales que obtienen en los países en vía de desarrollo y a costa en la mayoría de las ocasiones de su propio desarrollo económico. En primer lugar, carecemos de criterio claro acerca de qué clase de derechos deberían de ser protegidos por las empresas. En segundo lugar, de contar con códigos de conducta estrictos de aplicación que se requieren acuerdos multilaterales que vigilen y exijan su cumplimiento. En tercer lugar, el carácter global de las empresas transnacionales hace extremadamente complejo que los gobiernos locales puedan ejercer control sobre las prácticas empresariales, particularmente en los países menos desarrollados:

«Los grandes mercados internos de las empresas transnacionales permiten que una parte sustancial de sus transacciones internacionales puedan saltarse los controles nacionales. Los niveles de ganancia —y de ahí también el grado de responsabilidad fiscal— pueden ser minimizados cobrándoles de más a sus filiales por los servicios, los gastos de licencia y las importaciones de tecnología, privando así a los gobiernos huéspedes de los ingresos impositivos correspondientes».  

26 Ibidem, p. 189.
27 Ibidem, p. 179.
Las Metas del Milenio así como los programas del Programa de Desarrollo de las Naciones están muy bien y son muy loables desde el punto de vista humanitario y moral. Se supone que es el tipo de cosas que las organizaciones internacionales que dependen de las Naciones Unidas se espera que haga; pero a largo plazo puede que resulte demasiado costoso cuando no ineficaz. Sorprendentemente en ni uno ni otro caso se propone un programa de dararme progresivo. La deuda externa de los 41 países más endeudados en 1997 suponía una cifra cercana a la cuarta parte de lo que el mundo se gastó en ese mismo año en armas. La pobreza está estrechamente relacionada con el gasto que cada año los países de todo el planeta dedican a la compra y fabricación de armas. Si sólo dos semanas del gasto militar mundial supone 30.000 millones de dólares, se podría financiar el coste anual de la década del agua y de la sanidad propuesta por la ONU, tanto las metas del Desarrollo del Milenio como los seis objetivos del Programa del Desarrollo de la ONU podrían alcanzar en pocos años, si se destinara a su financiación la mitad de lo que se destina al gasto militar.

Existen algunos obstáculos que potencialmente podrían convertir a la ética global en un discurso programático lleno de buenas intenciones, pero lamentablemente ineficaz a la hora de resolver los problemas que causan tanto sufrimiento y estrés a los seres humanos. El primero, y en mi opinión el más difícil de salvar, es la estructura política de los estados soberanos. Si la ética global ha de tener alguna probabilidad mínima de éxito, ésta ha de pasar por una radical transformación de las instituciones gubernamentales de los países más ricos del planeta. Es una asunción altamente improbable creer que esos gobiernos representen y administren los intereses de sus ciudadanos. Si hay algo verdaderamente que haya puesto en claro la globalización del mercado es la incapacidad de los estados nacionales para controlar los procesos de inversión de los grupos multinacionales. El éxito de la globalización significa la quebra de las instituciones políticas y financieras que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han diseñado la distribución de riquezas y el mapa político del planeta. El segundo obstáculo tiene que ver con la reticencia al cambio que muestran las sociedades post-industriales, en buena parte deliberadamente fomentada por los medios de comunicación de masa que controlan los mismos grupos transnacionales. La alianza entre el poder económico y los medios de información resulta un medio muy eficaz para mantener unas coordenadas sociales en consonancia con el modo de vida que propugnan las grandes empresas. Es poco probable que la información alternativa resulte disponible con la misma facilidad que lo es las consignas consumistas o las doctrinas políticas oficiales.

Frente a las organizaciones oficiales que propugnan una política agresiva de ajustes presupuestarios, o que apoyan a regímenes totalitarios o fomentan conflictos armados con el sólo objetivo de extraer grandes beneficios a costa de tanto sufrimiento humano y que no hacen más que incrementar la injustificable distancia entre países ricos y pobres, han ido apareciendo nuevas organizaciones y movimientos que reivindican una política alternativa basada en una ética global que no comparte la visión ni las declaraciones programáticas de las políticas oficiales. El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) se fundó en Bélgica en 1990; el Jubileo 2000 y la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), dos movimientos alternativos que abogan por una reforma radical, cuando no por la supresión de las instituciones internacionales como el FMI que se consideran las responsables del estado de pobreza que sufren los países menos desarrollados. La Acción Global de los Pueblos (AGP), creada en 1998, rechaza la Organización Mundial

del Comercio y las políticas de liberalización, la Asociación por una Tasación sobre las Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda de los Ciudadanos (ATTAC) fundada en 1998 reivindica entre otras cosas la implantación del impuesto Tobin, la anulación de la deuda externa pública en los países menos desarrollados o la eliminación de los paraísos fiscales. La Marcha Mundial de Mujeres, una organización que surgió en 1998 en Canadá en protesta contra las condiciones de pobreza, violencia y explotación que sufren las mujeres. Por su parte, El Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil y la Confederación Campesina de Francia crearon en 1993 la Vía Campesina, una de las organizaciones más activas en contra de la política económica que impone la Organización Mundial del Comercio. A raíz de la masiva protesta de Seattle en noviembre de 1999 surgió la organización INDYMEDIA (Independent Media Center) para ofrecer una información alternativa sobre la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, el objetivo de la organización es ofrecer una visión de los acontecimientos que no está tenida por los prejuzgios ni por las imposiciones de la política oficial internacional.

El Segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre es una declaración a tener en cuenta a la hora de definir en el futuro las directrices de la ética global. El documento deja primeramente entrever que los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, ha demostrado ser un formidable obstáculo ante los principales acuerdos que hasta el momento se han escrito con el propósito de reducir el impacto medioambiental de las nuevas tecnologías, la proliferación de armas, la prohibición de las minas anti-personal, la violencia y el racismo. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se ha negado a respetar los acuerdos de Kyoto sobre el calentamiento global, los tratados Antimisiles y Antibalísticos; tampoco a suscribir la Convención sobre la Biodiversidad, o la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo y la Intolerancia. En segundo lugar, se presenta los recursos naturales como el agua, la tierra, los alimentos, bosques, semillas, culturas y las identidades de los pueblos son patrimonio de la humanidad para la presente y las futuras generaciones. En este sentido es fundamental preservar la biodiversidad. Finalmente se define como un derecho humano básico la soberanía alimentaria y se incide en la necesidad de contar con gobiernos democráticos efectivos que garanticen la participación de todos aquellos que tienen algo que decir en la toma de decisiones políticas que afecten a su forma de vida. Indirectamente se está proponiendo una profunda reforma gubernamental que sea capaz de transformar las instituciones internacionales que gobiernan las transacciones económicas en beneficio de una parte de los menos favorecidos de la Tierra y de otro de un mayor control democrático de las políticas transnacionales que escapan al control directo de los ciudadanos.

La ética global podría entenderse como una contrapropuesta al proceso de globalización responsable de la integración de mercados y de libertad de comercio del que disfrutan las grandes compañías transnacionales. Que la globalización haya demostrado sus efectos más negativos sobre la economía de los países menos desarrollados o que hasta ahora haya beneficiado palpablemente a las grandes empresas transnacionales no significa que sea ésa la única dirección a seguir. El Foro Social Mundial organizó una masiva protesta en Seattle en diciembre de 1999 ante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Se han llevado a cabo similares protestas en Washington y Praga frente a las reuniones de la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También hubo masivas concentraciones en Barcelona con motivo de la Cumbre de los Jefes de Estados de Europa y en México, entre otras, a raíz de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Financiamiento al Desarrollo.

29 La información ha sido tomada de Pastor: pp. 55-67.
La progresiva interrelación de las diferentes culturas, la transmisión de las informaciones, la aparición de medios de información alternativos podrían convertirse en poderosos aliados para alertar a la opinión pública y crear foros de debates y discusión que se orienten a una radical reforma del sistema internacional de finanzas y de los mecanismos gubernamentales de participación; de suerte que la administración de los recursos deje de satisfacer sólo los intereses plutocráticos.